



Asamblea General

Distr. general
5 de septiembre de 2014
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas

Séptimo período de sesiones

7 a 11 de julio de 2014

Tema 7 del programa provisional

**Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas**

Resumen final de las respuestas al cuestionario en que se recababa la opinión de los Estados y los pueblos indígenas acerca de las mejores prácticas relativas a posibles medidas y estrategias de aplicación apropiadas para lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Informe del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Resumen

El presente informe contiene un resumen de las respuestas recibidas de los Estados y los pueblos indígenas a los cuestionarios en que se recababa su opinión acerca de las mejores prácticas relativas a posibles medidas y estrategias de aplicación apropiadas para lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con lo solicitado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 24/10.



Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–6	3
II. Respuestas de los Estados	7–106	4
A. Estrategias nacionales de aplicación	8–15	4
B. Medidas legislativas, políticas u otras medidas adoptadas especialmente para hacer efectivos los derechos enunciados en la Declaración	16–60	5
C. Consideración de la Declaración al elaborar nuevas leyes y políticas	61–72	10
D. Iniciativas para dar a conocer la Declaración a nivel de la comunidad y del gobierno	73–83	12
E. Dificultades en la adopción de medidas y la aplicación de estrategias para alcanzar los objetivos de la Declaración	84–93	13
F. Prácticas óptimas	94–106	14
III. Respuestas de pueblos indígenas, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales	107–161	16
A. Estrategias globales de aplicación	107–113	16
B. Medidas jurídicas, políticas o de otra índole adoptadas especialmente para hacer efectivos los derechos enunciados en la Declaración	114–122	17
C. Consideración de la Declaración al elaborar nuevas leyes y políticas u otras medidas que afecten a las personas indígenas	123–129	18
D. Iniciativas para dar a conocer la Declaración a las comunidades y los gobiernos	130–142	19
E. Dificultades en la adopción de medidas y la aplicación de estrategias para alcanzar los objetivos de la Declaración	143–153	20
F. Prácticas óptimas	154–161	22
IV. Observaciones finales	162–173	23
A. Los Estados	163–168	23
B. Los pueblos indígenas, las organizaciones de pueblos indígenas y las organizaciones no gubernamentales	169–173	24

I. Introducción

1. En su resolución 18/8, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que, con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elaborase un cuestionario para recabar la opinión de los Estados acerca de las mejores prácticas relativas a posibles medidas y estrategias de aplicación apropiadas para lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En su resolución 24/10, el Consejo solicitó al Mecanismo de Expertos que siguiera adelante con la encuesta para recabar la opinión de los Estados y los pueblos indígenas, con miras a preparar un resumen final de las respuestas para presentarlo al Consejo en su 27º período de sesiones. El presente informe se basa en el presentado al Consejo en su 24º período de sesiones (A/HRC/24/51) e incorpora nuevas respuestas recibidas de Estados y de pueblos indígenas.

2. Los cuestionarios elaborados para los Estados y los pueblos indígenas se centraban en las siguientes cuestiones: elaboración de una estrategia global o nacional; adopción de medidas legislativas, políticas u otras medidas específicas para poner en práctica la Declaración; si se había tenido en cuenta la Declaración al elaborar las leyes, políticas u otras medidas pertinentes; si se habían tomado medidas para dar a conocer la Declaración a nivel de la comunidad y del Gobierno; los problemas con que se había tropezado al adoptar medidas para lograr los objetivos de la Declaración y opiniones sobre las mejores prácticas relativas a las medidas y estrategias de aplicación apropiadas para lograr los objetivos de la Declaración. Se pidió a los Estados y pueblos indígenas que, en sus respuestas, tuvieran en cuenta seis esferas temáticas diferentes: la libre determinación y la autonomía; la participación en la toma de decisiones, incluidas las obligaciones referidas a la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; la cultura y las lenguas; la no discriminación y la igualdad; las tierras, los territorios y los recursos y los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados¹.

3. El Mecanismo de Expertos expresa su agradecimiento a los Estados que respondieron al cuestionario. Se recibieron respuestas de: Alemania, Australia, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Chile, Congo, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Guyana, Iraq, Kazajstán, México, Myanmar, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, República Democrática Popular Lao, Suiza, Trinidad y Tabago y Venezuela (República Bolivariana de).

4. El Mecanismo de Expertos expresa también su agradecimiento a los pueblos indígenas y organizaciones de pueblos indígenas que respondieron al cuestionario. Se recibieron respuestas de: Aldet Centre (Santa Lucía); Botswana Khwedom Council (Botswana); Centro de Promoción y Desarrollo Rural Amazónico (Perú); Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (Perú); Community for the Advancement of Native Studies (Estados Unidos de América); Comunidad Emberá Purú de San Juan de Pequeni (Panamá); Indigenous Bar Association (Canadá); Khmers Kampuchea-Krom Federation (Viet Nam); Naga Women's Union y Naga Peoples Movement for Human Rights (India); National Indian Youth Council (Estados Unidos de América); National Khoi-San Council (Sudáfrica); National Native Title Council (Australia); Ogoni Indigenous Ministers Forum (Nigeria); Parlamento Sami de Noruega; Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu (República Democrática del Congo); San Support Organizations' Association of Namibia; Torres Strait Indigenous Peoples of Australia; y Yamasí People (Estados Unidos de América).

¹ Puede consultarse el texto completo de los cuestionarios en el documento A/HRC/24/51, párrafos 7 a 9.

5. Todas las respuestas se han publicado en el sitio web del Mecanismo de Expertos.
6. El Mecanismo de Expertos expresa también su agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Manitoba (Canadá) por su asistencia en el examen de las respuestas recibidas de los Estados.

II. Respuestas de los Estados

7. En la presente sección se resumen las respuestas de los Estados al cuestionario. Debe tenerse presente que los actores no estatales, como los pueblos indígenas, pueden tener opiniones divergentes sobre los beneficios de las medidas adoptadas para llevar a la práctica la Declaración o sobre las estrategias ideales para lograr su aplicación.

A. Estrategias nacionales de aplicación

8. Varios Estados indicaron que tenían una estrategia nacional para aplicar la Declaración. Guyana señaló que su estrategia de aplicación estaba bosquejada en varios documentos de política y que por lo menos uno de ellos se había elaborado en consulta con la gran mayoría de las comunidades amerindias. El Plan Nacional de Desarrollo de México se refiere específicamente a los pueblos indígenas, y una de las funciones de su Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es ayudar a los pueblos indígenas en el ejercicio de su libre determinación. El plan de la República Bolivariana de Venezuela se basa en aspectos normativos e institucionales, incluidas normas constitucionales, legislativas y reglamentarias ya vigentes. El plan nacional del Perú se centra en 12 esferas, a saber, participación; propiedad intelectual; educación intercultural y bilingüe; uso y transmisión de lenguas indígenas; no discriminación; consulta; mejora de las condiciones sociales y económicas; tierras, territorios y recursos naturales; salud; administración de justicia; acceso a la justicia; primer contacto y pueblos indígenas aislados. El Instituto Paraguayo del Indígena trabaja para poner en práctica la Declaración en torno a tres ejes: tierras y territorios, participación y desarrollo con una perspectiva étnica.

9. Varios Estados indicaron que los principios de la Declaración estaban recogidos en la legislación nacional. Por ejemplo, el Congo señaló que los principios fundamentales de la Declaración estaban incorporados en su Ley N° 5-2011, de Promoción y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Algunos Estados, como el Perú y Myanmar, señalaron las leyes y políticas nacionales vigentes que guardaban relación con esferas específicas de la Declaración, como la educación y la cultura. Sin embargo, no queda claro si esas leyes y políticas se elaboraron específicamente para alcanzar los objetivos de la Declaración.

10. Algunos Estados, como Finlandia, Noruega y Nueva Zelanda, señalaron que sus leyes y políticas nacionales ya eran conformes con los principios de la Declaración, por lo que no habían elaborado estrategias adicionales para aplicarla. Australia observó que había sinergia entre la Declaración y las políticas vigentes relativas a los pueblos aborígenes.

11. La respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia no indicaba explícitamente si el país tenía una estrategia específica para aplicar la Declaración. Sin embargo, su plan nacional de desarrollo, titulado "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", se elaboró con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas. La estrategia de Chile para cumplir internamente sus obligaciones internacionales en relación con los pueblos indígenas se centra en cinco esferas: cultura, identidad y educación; tierras; institucionalidad; participación y consulta; y desarrollo integral. Esta política se elaboró mediante un diálogo con los nueve pueblos indígenas del país.

12. Aunque El Salvador no cuenta con una estrategia específica para poner en práctica la Declaración, esta forma parte del marco normativo de un proyecto de política sobre los pueblos indígenas elaborado en 2013.

13. A pesar de no contar con una estrategia oficial para aplicar la Declaración, Australia mencionó su Disculpa Nacional de 2008 a los pueblos indígenas de Australia, y en particular a las generaciones robadas, como gesto simbólico que ponía de manifiesto su determinación de aplicar la Declaración. Además, indicó que los principios de la Declaración eran coherentes con la estrategia gubernamental nacional denominada "Cerrar la brecha", destinada a abordar la situación de desventaja de los indígenas. Se está debatiendo el reconocimiento de los australianos indígenas en la Constitución.

14. Alemania y Suiza señalaron que, aunque no tenían ningún pueblo indígena dentro de sus fronteras, sus políticas exteriores de desarrollo reconocían la Declaración como norma para los pueblos indígenas.

15. La mayoría de los Estados no proporcionaron información en sus respuestas sobre el alcance y la naturaleza de sus planes nacionales de aplicación. Tampoco indicaron cómo se habían formulado esas leyes y políticas, ni si lo habían hecho en consulta con los pueblos indígenas.

B. Medidas legislativas, políticas u otras medidas adoptadas especialmente para hacer efectivos los derechos enunciados en la Declaración

1. Todos los derechos de la Declaración

16. El 7 de noviembre de 2007, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley N° 3760 relativa a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En su respuesta al cuestionario, Bolivia proporcionó amplia información sobre las leyes y programas que guardan relación con la puesta en práctica de la Declaración, en particular en las esferas de la educación y las lenguas; las comunicaciones y los medios de información; la vivienda; las políticas económicas; la seguridad alimentaria; el desarrollo agrario y agrícola; la justicia y los derechos de la mujer en la administración de justicia; los derechos humanos; las tierras; el agua; los procesos de consulta; la descolonización y los procesos de despatriarcalización.

17. Chile también proporcionó un panorama completo de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos enunciados en la Declaración, en particular respecto de las cinco esferas señaladas en el párrafo 11. Dichas medidas abarcaban desde leyes hasta políticas y programas.

18. En 2011, el Congo promulgó la Ley N° 5-2011 para la Promoción y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incorpora los principios fundamentales de la Declaración. La Ley aborda numerosas cuestiones, como la consulta; el derecho de los pueblos indígenas a administrar sus asuntos internos y a recurrir a costumbres tradicionales para resolver conflictos internos; la protección de las costumbres y de las instituciones tradicionales; la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales; la protección de los lugares sagrados; la educación y los derechos de propiedad individuales y colectivos.

19. Uno de los principales objetivos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México es la armonización de las leyes federales y estatales con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. En su labor en este campo, la Comisión ha hecho referencia a la Declaración.

20. La estrategia de Australia "Cerrar la brecha" establece puntos de referencia para poner fin a las desventajas educativas que encuentran los niños indígenas, que Australia considera una prioridad fundamental para la aplicación de la Declaración.

21. Los derechos enunciados en la Declaración se reconocen en la Constitución Nacional y en el Estatuto de las Comunidades Indígenas del Paraguay. La Declaración también se utiliza como marco rector de las políticas y programas del Instituto Paraguayo del Indígena.

2. Libre determinación y autonomía

22. Como resultado de las enmiendas introducidas en la Constitución en 2001, México reconoce la libre determinación y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

23. Varios Estados indicaron en qué legislación se reconocía el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía. La mayoría de las disposiciones legislativas que reconocían o instituían zonas indígenas autónomas exigían que los pueblos indígenas votaran a favor de su autonomía. La jurisdicción indígena sobre dichas zonas autónomas varía. Algunos Estados señalaron que en ellas regían las propias leyes e instituciones de los pueblos indígenas.

24. El Estado Plurinacional de Bolivia ha iniciado un proceso de reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas. Varias comunidades han votado a favor de la autonomía y han puesto en marcha el proceso de elaboración de un estatuto autonómico con apoyo técnico del Ministerio de Autonomías. El proceso reconoce la necesidad de una participación equitativa de las mujeres en las estructuras gubernativas.

25. Burkina Faso también ha iniciado un proceso de descentralización mediante su Ley N° 055-2004/AN. Esta Ley consagra el derecho de los territorios al autogobierno y a la gestión de sus propios asuntos para promover su desarrollo y reforzar la gobernanza local. Ese proceso de descentralización ha transferido las competencias en los asuntos socioeconómicos y culturales.

26. La legislación del Congo garantiza a los pueblos indígenas el derecho a administrar sus asuntos internos y a recurrir a sus usos y costumbres para resolver los conflictos internos. La legislación protege también los usos y costumbres y las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas.

27. La Constitución de Guyana dispuso el establecimiento de la Comisión de los Pueblos Indígenas, que es una de las cinco comisiones que se encargan de las cuestiones relacionadas con los derechos constitucionales. El objetivo de la Comisión es "establecer mecanismos para mejorar la situación de los pueblos indígenas y responder a sus demandas y necesidades legítimas". Como parte de su mandato, formula recomendaciones sobre la participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones a nivel nacional y en otras decisiones que afectan a su vida. La Ley de los Amerindios de 2006 delega en los consejos de aldea la administración de los asuntos internos.

28. Dinamarca promulgó la Ley de Autonomía de Groenlandia en 2009. En el preámbulo se reconoce que el pueblo de Groenlandia es un pueblo conforme al derecho internacional y con derecho de libre determinación. El actual Gobierno de Groenlandia ha sido elegido democráticamente y todos los miembros actuales del Parlamento y del Gobierno son de ascendencia inuit.

29. La Constitución de Finlandia reconoce el derecho del pueblo sami al autogobierno y a la autonomía lingüística y cultural en su región nativa. La Ley del Parlamento Sami regula el funcionamiento del sistema de autogobierno.

3. Participación en la toma de decisiones, incluidas las obligaciones referidas a la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas

30. La mayoría de los Estados proporcionaron información sobre las medidas legislativas y políticas adoptadas para hacer efectivo el derecho a participar en la adopción de decisiones. La información proporcionada se refería a dos aspectos: la participación en los procesos de decisión a nivel nacional y la consulta sobre las decisiones que afectan a los derechos de los pueblos indígenas.

31. En el Estado Plurinacional de Bolivia, los pueblos indígenas están representados en los órganos legislativos. En Burkina Faso hay ministros del Gobierno de las etnias peul y tuareg y representantes elegidos de esas etnias en el Parlamento.

32. En el Congo, la legislación garantiza la participación de los pueblos indígenas en los procesos de decisión. El Perú también promulgó, el 23 de agosto de 2011, una ley sobre el derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

33. Francia indicó que en su departamento de la Guyana Francesa se había establecido en 2010 una junta asesora de los amerindios y los bushinengués. Los consejos regionales y el consejo general consultan con esta junta sobre cualquier plan o propuesta que pueda afectar al medio ambiente o las actividades culturales de los amerindios y los bushinengués.

34. Chile emprendió una consulta sobre las instituciones indígenas, que tuvo que modificar tras recibir quejas de los dirigentes indígenas sobre el proceso. La primera etapa de la consulta tiene ahora por objeto establecer los procedimientos de consulta.

35. En 2005, el Gobierno de Noruega y el Parlamento Sami celebraron un acuerdo sobre procedimientos de consulta con el fin de que las nuevas medidas y disposiciones legales fueran conformes con los derechos de los samis. Los procedimientos de consulta velan también por que los samis puedan participar de manera significativa y tener una influencia real en los procesos de adopción de decisiones que afecten directamente a sus intereses. Mediante un Real Decreto, el Gobierno ha confirmado que los procedimientos acordados se aplican a la totalidad de la administración del Gobierno central. Noruega señala que el derecho de libre determinación se ejerce principalmente mediante el derecho a participar en la toma de las decisiones relacionadas directamente con los samis, además de en las decisiones de la administración pública que afectan tanto a los samis como a la sociedad en general. La obligación de consulta que se deriva de esos derechos se hace efectiva mediante los procedimientos acordados entre las autoridades del Estado y el Parlamento Sami de conformidad con el Convenio N° 169 de la OIT.

36. En la Ley del Parlamento Sami de Finlandia se contempla la obligación de negociar con esa institución acerca de varias cuestiones, entre las que cabe citar: la planificación de la comunidad; la gestión, utilización, arrendamiento y asignación de las tierras del Estado, las zonas de conservación y las zonas silvestres; las solicitudes de licencias para registrar yacimientos mineros; los cambios legislativos o administrativos en las ocupaciones pertenecientes a la cultura sami; el desarrollo de la enseñanza en la lengua sami en las escuelas, y su empleo en los servicios sociales y de salud; o cualquier otra cuestión que afecte a la lengua y la cultura sami y a la condición de sus miembros como pueblo indígena. La obligación de negociar alcanza a todos los niveles de la administración.

37. En Guyana, la titularización y demarcación de las tierras y territorios amerindios requieren el consentimiento libre, previo e informado de esos pueblos.

38. Australia cuenta con un marco de participación indígena que, según afirma, refleja su aspiración a mantener una colaboración efectiva con los pueblos indígenas. El Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia da voz a los aborígenes y a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres en los asuntos estratégicos nacionales. Australia

ha creado también el Consejo Consultivo Indígena del Primer Ministro, que proporciona asesoramiento sobre las cuestiones indígenas que van surgiendo. El Consejo está integrado por indígenas y no indígenas.

39. En los Estados Unidos, de conformidad con la Orden Presidencial N° 13175, sobre la Consulta y Coordinación con los Gobiernos de las Tribus Indias, los organismos federales tienen la obligación de consultar a los dirigentes de las tribus cuando adopten decisiones que afecten a las comunidades tribales.

40. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México ha establecido un sistema de consulta con los pueblos indígenas que permite su participación en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales.

41. El Perú ha promulgado una ley sobre el derecho a la consulta en virtud de la cual esta obedece al propósito de alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas. Sobre la base de esa ley, se ha elaborado una guía metodológica con asistencia técnica de la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

4. Cultura y lenguas

42. En las respuestas de los Estados se expusieron ejemplos de lenguas indígenas reconocidas en las constituciones de los Estados. Sin embargo, la respuesta más común fue la de destacar la importancia de la educación en la promoción y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a su cultura y su lengua. En algunos casos se señaló que las lenguas indígenas se enseñaban en las escuelas nacionales y unos cuantos Estados indicaron explícitamente que los programas de estudios se elaboraban en consulta con los pueblos indígenas. Algunos Estados señalaron la necesidad de superar los estereotipos negativos de las culturas y las lenguas indígenas a fin de preservar y promover su uso.

43. El sistema educativo boliviano ha sido modificado sobre la base de una ideología y una práctica política de descolonización, liberación, revolución, antiimperialismo y transformación sin discriminación o explotación. El sistema educativo reestructurado ofrece educación cultural, que contribuye a la afirmación y el fortalecimiento de las identidades culturales, y al reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas en diálogo con otras culturas y lenguas. La Constitución boliviana establece que la educación se iniciará en el idioma materno de cada región. También prevé la creación de universidades indígenas.

44. En el Perú, la Ministra de Educación se refirió expresamente a la Declaración en relación con la creación de la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. El Perú ha promulgado también una ley sobre la educación intercultural bilingüe que tiene por objeto reconocer la diversidad cultural y promover la educación intercultural bilingüe en las regiones habitadas por pueblos indígenas. La legislación peruana reconoce y garantiza también el derecho de los pueblos indígenas a condiciones de educación iguales a las del resto de la nación. El Ministerio de Educación ha de elaborar y ejecutar un plan de acción para la educación intercultural bilingüe. Los pueblos indígenas deben participar en la formulación y ejecución de esos programas educativos. El Perú ha elaborado también un programa de capacitación para los intérpretes que participan en los procesos de consulta.

45. Chile ha señalado los programas de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y culturas indígenas existentes en las escuelas de la nación. La Constitución de Guyana ampara el derecho de los pueblos indígenas a la "protección, preservación y difusión de sus lenguas, su patrimonio cultural y su modo de vida". La Constitución del Iraq garantiza el derecho de los iraquíes a la educación en su idioma materno.

46. La Constitución de la República Democrática Popular Lao dispone que la lengua lao es el idioma y dialecto oficial del país. Sin embargo, en la vida cotidiana, cada grupo étnico es libre de conservar y utilizar su dialecto en la familia y la comunidad para preservar su cultura y sus tradiciones.

47. En el Congo, la ley garantiza los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas a su propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales. La ley también protege la propiedad cultural, religiosa y espiritual.

48. La Ley de la Lengua Sami de Finlandia regula el derecho de los samis a utilizar su propia lengua ante los tribunales y otras autoridades. La Ley obliga también a las autoridades públicas a hacer valer y promover los derechos lingüísticos de los samis.

49. En 2011, el Gobierno de Trinidad y Tabago aprobó la concesión de 25 acres de terreno para la creación de una Aldea del Patrimonio Amerindio con el fin de proteger la cultura y las tradiciones de esos pueblos.

50. El Salvador está preparando una modificación constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y adoptar políticas para preservar y desarrollar la identidad, los valores y la espiritualidad étnicos y culturales. Invierte en iniciativas educativas para revitalizar las lenguas indígenas, por ejemplo la creación de diplomas para maestros de educación intercultural bilingüe. Esos programas se elaboran y ejecutan en consulta con los pueblos indígenas.

5. No discriminación e igualdad

51. Varios Estados, entre ellos Chile y Guyana, indicaron que su Constitución consagraba la no discriminación y la igualdad.

52. Algunos Estados indicaron que el principio de igualdad prohibía a los Estados dar a cualquier grupo un trato diferente del de los demás. La Constitución de la República Democrática Popular Lao estipula que todos los ciudadanos del país son iguales ante la ley. Según el Gobierno, de conformidad con el principio de igualdad, cada grupo étnico es especial y, por lo tanto, ninguno es más especial que los demás, lo que ha contribuido a la paz y la armonía y a la solidaridad entre la población multiétnica del país.

6. Tierras, territorios y recursos

53. Varios Estados mencionaron que tenían procesos en curso para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y conceder títulos de propiedad sobre ellas. Unos pocos Estados se refirieron al carácter colectivo de esos títulos. Varios indicaron que los pueblos indígenas tenían cierta autoridad gubernamental o jurisdicción sobre sus tierras.

54. El Estado Plurinacional de Bolivia está fortaleciendo el proceso de redistribución de tierras y la autogestión de la comunidad, y también ha publicado un atlas de los territorios indígenas. Chile ha reanudado los mecanismos para traspasar tierras a los pueblos indígenas en condiciones transparentes y objetivas. En el Congo, los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas están amparados por la ley.

55. Francia señaló que la creación del Parque amazónico de Guyana en la Guyana Francesa ofrecía protección a los pueblos indígenas de la región para mantener y preservar sus prácticas de subsistencia, así como para preservar los recursos naturales que explotan.

56. En Guyana, la Constitución de 2003 protege la propiedad, incluida la de los amerindios. En virtud de la Ley de los Amerindios de 2006, estos reciben títulos de propiedad sobre sus tierras que son absolutos y para siempre. La titularización y demarcación de las aldeas amerindias se efectúa con el consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos. Esas tierras y recursos son administrados por los consejos de

aldea, que tienen facultades normativas respecto de "la gestión, el uso, la preservación, la protección y la conservación de las tierras y los recursos de las aldeas o de cualquier parte de estos". Ha aumentado el porcentaje de las tierras amerindias que se han titularizado y demarcado.

57. Nueva Zelanda respeta la importancia de la relación de los pueblos maoríes con sus tierras y recursos, pero también mantiene los regímenes jurídicos vigentes para la propiedad y la gestión de las tierras y los recursos naturales.

58. La Constitución del Perú protege los derechos a la tierra y se ha puesto en marcha un proceso para el reconocimiento y la concesión de títulos de propiedad sobre esas tierras.

59. El Salvador reconoce los daños causados por la desintegración de las comunidades indígenas resultante de los cambios en el uso de la tierra y ha comenzado a ocuparse de esas cuestiones por conducto del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.

7. Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados

60. Nueva Zelanda indicó que el Tratado de Waitangi es el documento que sienta las bases de la relación entre el Gobierno y los maoríes. Nueva Zelanda se ha comprometido a resolver las reclamaciones pendientes en el marco del Tratado antes del final de 2014 y señaló que está asignando más recursos y financiación para continuar el proceso de solución de esas reclamaciones.

C. Consideración de la Declaración al elaborar nuevas leyes y políticas

61. En ninguna de las respuestas se incluyó información en el sentido de que los Estados hubieran promulgado leyes que exigieran expresamente que se tuviera en cuenta la Declaración al formular nuevas leyes, políticas u otras medidas. Sin embargo, hay ejemplos de casos en que los objetivos y principios de la Declaración han inspirado los procesos que conducen a la formulación de nuevas leyes y políticas.

62. Varios Estados han formalizado procesos y promulgado legislación que exigen la participación de los pueblos indígenas en los procesos de decisión. Esas leyes obligan por lo general a los Estados a consultar previamente a los pueblos indígenas cuando adoptan decisiones que afecten directamente a sus derechos. Algunos Estados mencionaron específicamente el requisito del consentimiento libre, previo e informado en las leyes y políticas pertinentes y muchos Estados indicaron que las medidas para las que se requería una consulta se elaboraban en consulta con los pueblos indígenas. Se señalaron algunos ejemplos de consultas realizadas a través de las instituciones y los procesos de decisión de los pueblos indígenas.

63. La Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Congo se elaboró mediante un proceso que estuvo abierto a la participación pública y en el que intervinieron autoridades gubernamentales, la sociedad civil y expertos internacionales. Se consultó a los pueblos indígenas en sus localidades en todos los departamentos en que existía una concentración considerable de esos pueblos. Estos intervinieron también activamente en los debates que culminaron en la versión definitiva de la legislación.

64. En el Estado Plurinacional de Bolivia, la consulta a los pueblos indígenas forma parte de los principios de apertura y transparencia que promueve el Gobierno. Hay varias leyes que exigen la consulta a los pueblos indígenas y su participación en la toma de decisiones.

65. La Ley Indígena de Chile reconoce y protege a los pueblos indígenas y sus tierras, así como a las instituciones y culturas indígenas. Esta Ley establece medidas especiales para el cumplimiento en la práctica de las obligaciones de consulta y participación. Dispone que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus organizaciones tradicionales y de las comunidades, organizaciones y asociaciones reconocidas en la Ley Indígena. En una ocasión en que los pueblos indígenas expresaron preocupación por el procedimiento utilizado para la consulta, el Gobierno modificó el procedimiento para examinar las nuevas instituciones indígenas y el reconocimiento constitucional.

66. En Guyana, la Ley de los Amerindios de 2006 exige el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes de las aldeas amerindias sobre las cuestiones que requieren su participación o apoyo en relación con las tierras o la minería, la titularización y demarcación de las tierras, la entrada y el acceso a las aldeas amerindias y el uso de los recursos naturales.

67. En Nueva Zelanda, un ejemplo de la participación maorí en la adopción de decisiones es el de los acuerdos negociados para la gestión conjunta de los recursos, como las tierras para la conservación propiedad de la Corona y los parques nacionales. Además, en la jurisprudencia reciente se ha concluido que el *common law* debería desarrollarse en consonancia con las nuevas normas de derechos humanos y el Tratado de Waitangi.

68. El Perú ha promulgado una ley que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente a sus derechos colectivos en las esferas de la existencia física, la identidad cultural, el territorio, la educación, la salud, la calidad de vida y el desarrollo de sus pueblos. Esa ley se aplica también a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacionales y regionales que inciden directamente en los derechos de los pueblos indígenas. Las disposiciones reglamentarias de esta ley se están redactando con la participación de diversos organismos gubernamentales y representantes de pueblos indígenas.

69. Varios Estados indicaron que, sobre la base de los principios de la igualdad oficial de todos los ciudadanos, no existía ninguna ley que estableciera un reconocimiento o proceso especial para que los pueblos indígenas participaran en la adopción de decisiones. En Burkina Faso, la Ley de Descentralización tiene en cuenta las consideraciones expuestas en la Declaración. Sin embargo, Burkina Faso no desea crear una jerarquía entre las poblaciones del Estado y, por lo tanto, no tiene en cuenta explícitamente la Declaración cuando formula nuevas leyes y políticas.

70. En Australia, se ha establecido la estrategia "Cerrar la brecha" con el objetivo a largo plazo de cumplir lo dispuesto en diversos artículos de la Declaración.

71. La Estrategia de Derechos Humanos del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo se refiere explícitamente a la Declaración y al principio del consentimiento libre, previo e informado como puntos de referencia esenciales que deben ser respetados al planear toda medida de desarrollo que pueda afectar a los pueblos indígenas.

72. En Noruega hay varios ministerios responsables del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Dichos ministerios deben tener en cuenta las obligaciones internacionales pertinentes al elaborar toda ley, política o medida de otro tipo que afecte a los pueblos indígenas. El ordenamiento jurídico prevé la participación de quienes resulten afectados por la promulgación, modificación o derogación de normas jurídicas.

D. Iniciativas para dar a conocer la Declaración a nivel de la comunidad y del gobierno

73. Las respuestas recibidas de los Estados indicaron varias medidas directas para dar a conocer la Declaración. Algunos Estados señalaron que preferían centrar las campañas en los instrumentos generales de derechos humanos, como las leyes nacionales o los tratados de derechos humanos. Las iniciativas estaban dirigidas tanto a los gobiernos como a los pueblos indígenas. Un Estado hizo hincapié en la importancia de que los pueblos indígenas conocieran sus derechos y los gobiernos conocieran la Declaración. Se citaron algunos ejemplos en que la educación y la formación sobre los derechos de los pueblos indígenas formaban parte de las iniciativas para dar a conocer la Declaración.

74. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México ha difundido la Declaración dentro del Gobierno y la ha hecho traducir a 18 idiomas indígenas. Noruega también ha traducido la Declaración al noruego y al sami septentrional. El Salvador ha traducido la Declaración a la lengua nahuatl y la ha incorporado a su diccionario y libro de gramática. El Paraguay ha traducido la Declaración al guaraní y le ha dado una amplia difusión, en particular entre el personal del poder judicial.

75. El Congo ha centrado la labor de difusión en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos y en los instrumentos de derechos humanos para los pueblos indígenas. Durante los "Días del Parlamento" se impartió educación a los parlamentarios congoleños sobre los derechos de los pueblos indígenas y se les explicó la Declaración.

76. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia organizó un ciclo de talleres junto con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT titulados "Los alcances del Convenio N° 169 de la OIT: Desafíos para su Aplicación e implementación y Estrategias para la Acción". Los talleres estuvieron dirigidos a representantes del Estado, funcionarios públicos y pueblos indígenas. También se ha elaborado y distribuido documentación sobre los derechos colectivos.

77. Chile tiene un programa titulado "Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos interculturales", que incluye la prestación de apoyo a las actividades para difundir información e impartir capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho internacional, con especial hincapié en el Convenio N° 169 de la OIT.

78. Francia indicó que tenía un embajador para los derechos humanos y que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se organizaban mesas redondas y actividades culturales en la Guyana Francesa.

79. Tras la promulgación de la Ley de los Amerindios en Guyana, se observó la necesidad de realizar actividades de educación y sensibilización destinadas a los consejos de aldeas y los miembros de las comunidades. Se llevaron a cabo varios programas de capacitación y se publicó un folleto titulado "La Ley de los Amerindios en un lenguaje sencillo", que se distribuyó a todos los dirigentes y miembros de las comunidades. El Gobierno de Guyana organiza también programas y talleres de capacitación para los empleados públicos. Además, los dirigentes indígenas pueden pedir aclaraciones sobre la Ley de los Amerindios durante las reuniones bienales de los líderes de los poblados.

80. Conjuntamente con el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, la Comisión Australiana de Derechos Humanos celebró un "Diálogo sobre la Declaración" con las comunidades indígenas en 2013 y 2014 para aumentar el conocimiento de la Declaración. La institución nacional de derechos humanos de Australia elaboró una sinopsis, una guía para la comunidad y un cartel relativos a la Declaración que tenían por

objeto poner de relieve ejemplos concretos de ventajas que la Declaración puede aportar a los indígenas australianos.

81. Algunos Estados indicaron que, aunque no estaban adoptando medidas para promover la Declaración, otras organizaciones del país distribuían información sobre la Declaración. En Nueva Zelanda, el anuncio de apoyo a la Declaración ha dado amplia publicidad a este instrumento. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda ha traducido la Declaración al te reo maori y ha divulgado su contenido e importancia. Varias organizaciones del Perú han elaborado algunos materiales, pero no existe una campaña nacional que ayude a conocer la Declaración.

82. Algunos Estados expresaron sus dudas sobre la conveniencia de promover directamente la Declaración y los derechos de los pueblos indígenas. Burkina Faso observó que su política cultural nacional defendía los principios del respeto, pero no señaló ninguna medida para promover los derechos de los pueblos indígenas.

83. El Gobierno de Suiza apoya a dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan para fortalecer la capacidad de negociación de los delegados indígenas en las Naciones Unidas mediante cursos de capacitación y transferencia de conocimientos.

E. Dificultades en la adopción de medidas y la aplicación de estrategias para alcanzar los objetivos de la Declaración

84. Uno de los mayores problemas es el desconocimiento de la existencia y del contenido de la Declaración y otros instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Un Estado indicó que ese desconocimiento se veía agravado por la falta de una mayor adhesión de la sociedad civil a los derechos de los pueblos indígenas. Además, en muchos casos esos derechos no eran una prioridad para los gobiernos.

85. Algunos Estados indicaron que una dificultad con que tropezaban era la falta de información sobre cómo llevar a la práctica la Declaración. En particular, existía una clara necesidad de mejorar los mecanismos de diálogo e intercambio de información entre el Estado y los pueblos indígenas.

86. Un Estado mencionó la falta de consenso sobre el significado de algunos términos —libre determinación, soberanía y consentimiento libre, previo e informado, entre otros— como un impedimento para la aplicación práctica de la Declaración. Un Estado señaló la necesidad de aclarar las repercusiones de la libre determinación, entre otras cosas la manera en que podía plasmarse en políticas prácticas.

87. Otro problema importante que se señaló era el costo de implementación de la Declaración y los limitados recursos disponibles para llevar a cabo esa labor. Se necesitarían fondos para ejecutar las diferentes estrategias a fin de cumplir los objetivos de la Declaración. Concretamente, se mencionó el costo de la demarcación y titularización de las tierras. Un Estado indicó que el aislamiento de las comunidades indígenas generaba problemas de acceso a los bienes y servicios y dificultaba su suministro oportuno, además de elevar el costo de este a niveles prohibitivos. Por otra parte, había dificultades para conservar y publicar los materiales en cada una de las lenguas indígenas que podían existir en un mismo Estado.

88. Otro problema era la necesidad de variaciones regionales en la aplicación. Concretamente, las políticas de cada gobierno no estaban organizadas de la misma manera. Además, cada uno de los pueblos indígenas tenía su propia historia, cultura, necesidades y perspectivas.

89. Un Estado indicó que elaborar legislación nacional era difícil. Además, había que incorporar y aplicar los compromisos internacionales en las políticas públicas. Un Estado observó también con preocupación que era necesario que las políticas formuladas para los pueblos indígenas contribuyeran también al desarrollo de la sociedad en general.

90. Un Estado indicó que, debido a la división constitucional de las facultades legislativas entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, era un problema lograr que hubiera coherencia entre los distintos estados de una federación.

91. Un problema importante que se señaló es el de la vigilancia y aplicación de las leyes, en particular en los sectores minero y forestal. Un Estado indicó que era difícil impedir que ONG e investigadores extranjeros poco escrupulosos se apropiaran indebidamente de derechos de propiedad intelectual y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

92. Algunos Estados no mencionaron ninguna dificultad y, en cambio, reiteraron los derechos de que disfrutaban los pueblos indígenas en su territorio.

93. Un Estado señaló que los programas y políticas gubernamentales no eran suficientes para alcanzar los objetivos de la Declaración y subrayó que la comunidad indígena debía implicarse más.

F. Prácticas óptimas

94. En sus respuestas, los Estados indicaron numerosas medidas y prácticas óptimas para aplicar la Declaración. Para cumplir plenamente los objetivos de la Declaración, los gobiernos debían instaurar un proceso de aplicación continua y proseguir su labor basándose en los logros obtenidos. La aplicación de la Declaración debería tener en cuenta las particularidades y los antecedentes históricos y culturales de los pueblos indígenas. Los Estados que no tenían pueblos indígenas dentro de sus fronteras podían utilizar la Declaración como marco de asistencia para el desarrollo.

95. En los casos en que ya existían tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, esos instrumentos podían servir de base para la asociación, el respeto mutuo, la cooperación y la buena fe entre los Estados y los pueblos indígenas. Como se indica en la respuesta de Francia, en el Acuerdo de Numea entre Francia y los canacos de Nueva Caledonia se reconocieron los efectos dañinos de la colonización, se devolvieron tierras confiscadas a los pueblos indígenas, se dispuso la plena participación del pueblo canaco en la adopción de decisiones y se estableció un proceso de consulta.

96. Chile señaló que el método que aplicó, a saber, celebrar mesas redondas regionales para una "reunión histórica", fue ejemplo de un proceso destinado a crear un plan nacional para alcanzar los objetivos de la Declaración. En las mesas redondas participaron el Gobierno, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y representantes indígenas. El objetivo era generar confianza y determinar los temas importantes para los pueblos indígenas.

97. Los Estados empleaban una variedad de medidas constitucionales, legislativas y políticas para aplicar la Declaración, entre otras redactar nuevas leyes, enmendar la legislación existente, crear nuevos programas e iniciativas y aumentar su participación en los asuntos indígenas internacionales. Este enfoque multifacético podía incluir la aprobación de una ley especial que reconociera los derechos de los pueblos indígenas, elaborada con la participación efectiva de esos pueblos sobre la base del principio del consentimiento libre, previo e informado. Para ello también podía ser necesario el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas y la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT.

98. El Estado Plurinacional de Bolivia, en particular, demostró la aplicación de buenas prácticas en relación con la igualdad de género al reconocer la necesidad de que los programas estuvieran dirigidos y beneficiaran específicamente a las mujeres indígenas. En el marco de su estrategia para combatir la violencia contra las mujeres indígenas, el plan nacional de Australia preveía el fortalecimiento de las comunidades indígenas mediante el fomento de la capacidad de liderazgo de las mujeres indígenas dentro de las comunidades y de la sociedad australiana en general.

99. El Paraguay destacó la importancia de regularizar la propiedad colectiva de la tierra y de promover el acceso de los pueblos indígenas a medios de vida sostenibles.

100. Los Estados podían trabajar con los organismos de las Naciones Unidas para mejorar sustancialmente la situación de los pueblos indígenas, especialmente si dichos organismos prestaban asistencia técnica. Chile señaló la necesidad de un apoyo continuo de la comunidad internacional para aplicar estrategias encaminadas a cumplir los objetivos de la Declaración, especialmente para estudiar y dar a conocer las prácticas óptimas a fin de ayudar a los Estados a lograr ese fin. Noruega demostró la aplicación de prácticas óptimas al responder al informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/HRC/18/35/Add.2), indicando de qué forma tenía previsto el Gobierno dar cumplimiento a las recomendaciones.

101. Muchos Estados se refirieron a la relación existente entre la Declaración y otros tratados internacionales de derechos humanos relativos a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio N° 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

102. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas habían ayudado al Congo a promulgar una ley especial para los pueblos indígenas. La asistencia técnica de la comunidad internacional, en particular en materia de información y fomento de la capacidad, permitiría, en opinión de algunos Estados, mejorar considerablemente la aplicación.

103. Para alcanzar los objetivos de la Declaración, los Estados habían promovido la creación de capacidad para los pueblos indígenas. Además, habían alentado a que se reforzaran las instituciones de los pueblos indígenas, las ONG y las estructuras de autogobierno. También era preciso ofrecer oportunidades a los pueblos indígenas para que participaran en pie de igualdad en el proceso global de desarrollo de su país. Australia aplicaba una política destinada a subsanar las desventajas de los pueblos indígenas en esferas como la educación, los servicios de salud, el desarrollo comunitario y la seguridad de la comunidad.

104. Los Estados señalaron asimismo las mejores prácticas en la esfera de la educación y la promoción de las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas. Señalaron que era importante incluir las lenguas indígenas en el sistema educativo y elaborar estrategias para ofrecer una educación bilingüe e intercultural, con participación de los pueblos indígenas. Además, podrían crearse centros culturales para promover las culturas indígenas. Por último, algunos Estados han reconocido las lenguas indígenas como idiomas oficiales.

105. Algunos Estados indicaron que, para alcanzar los objetivos de la Declaración, se había creado un presupuesto especial destinado a la consulta con los pueblos indígenas. Otros Estados proporcionaron fondos para resolver los problemas de los indígenas urbanos y realizar estudios sobre la empleabilidad. Con este fin, los Estados indicaron que sería necesario que las instituciones financieras internacionales ayudaran a los países en desarrollo durante todo el proceso de aplicación de la Declaración.

106. Noruega señaló como práctica óptima la elaboración de políticas más sostenibles a raíz de las consultas entre el Sámediggi y el Gobierno noruego.

III. Respuestas de pueblos indígenas, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales

A. Estrategias globales de aplicación

107. Varias organizaciones de pueblos indígenas indicaron que habían elaborado estrategias para aplicar la Declaración. En algunos casos, organizaciones como Community for the Advancement of Native Studies y la Asociación de Organizaciones de Apoyo a los San, de Namibia, se habían creado específicamente como estrategia de aplicación. Aldet Centre señaló la creación de Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore International, organización centrada en la aplicación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como de los instrumentos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales.

108. La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos mencionó que había elaborado una estrategia global para alcanzar los objetivos de la Declaración, basando sus actividades en los derechos de los pueblos indígenas a la igualdad y la libre determinación. Una actividad había entrañado la promoción de la creación de un parlamento de los pueblos qollana aymara y quechua del Perú, Chile y Bolivia con el fin de promover las relaciones transfronterizas.

109. Aunque no había adoptado una estrategia escrita global de aplicación de la Declaración, el Parlamento Sami de Noruega informó de que había trabajado para ponerla en práctica a diario desde su aprobación en 2007.

110. Algunas organizaciones prestaban especial atención a la tarea de dar a conocer la Declaración a las comunidades indígenas y sus dirigentes, la comunidad jurídica, los estudiosos de la cuestión y la sociedad en general. La organización Indigenous Bar Association había trabajado en pro de ese objetivo organizando cursos prácticos, publicando material en línea para facilitar su uso y redactando un artículo sobre las experiencias de la aplicación de la Declaración en el Canadá. La Asociación mencionaba la Declaración en toda su labor de promoción. Las organizaciones Naga Women's Union y Naga Peoples Movement for Human Rights habían elaborado estrategias de aplicación para traducir la Declaración a las lenguas indígenas y habían organizado campañas de sensibilización. El National Indian Youth Council informó sobre su labor de promoción con pueblos indígenas urbanos.

111. Algunas organizaciones de pueblos indígenas señalaron que sus estrategias de aplicación incluían la participación en la labor del sistema de las Naciones Unidas, a veces llevando casos ante los órganos creados en virtud de tratados y otras veces participando activamente en mecanismos y actividades internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el examen periódico universal y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para procurar el logro de los objetivos de la Declaración.

112. La estrategia principal del National Native Title Council era propugnar que los gobiernos y otras organizaciones se guiaran activamente por los principios y objetivos de la Declaración. Ese proceso entrañaba, entre otras cosas, la inclusión de una representación

indígena en los procesos legislativos, administrativos y normativos pertinentes, el fomento del principio del consentimiento libre, previo e informado de los propietarios de tierras tradicionales y la concertación de acuerdos sobre las cuestiones y los proyectos que afecten a los territorios y tierras tradicionales.

113. Varias organizaciones de pueblos indígenas indicaron que tenían estrategias para aplicar la Declaración, pero no las describieron en detalle, en tanto que otras señalaron que no habían elaborado estrategias específicas.

B. Medidas jurídicas, políticas o de otra índole adoptadas especialmente para hacer efectivos los derechos enunciados en la Declaración

114. En algunos casos, las organizaciones de pueblos indígenas no estaban al corriente de que sus respectivos gobiernos nacionales hubieran adoptado medida alguna para aplicar la Declaración. Varias organizaciones observaron que habían intentado, sin éxito, alentar a los Estados a que adoptasen medidas específicas para ello.

115. Una organización observó que el gobierno de su país estaba preparando legislación en la que se abordarían cuestiones indígenas y que se estaba consultando a los pueblos indígenas, aunque se consideraba que el proceso no se ajustaba a lo establecido en la Declaración. En el proyecto de ley propuesto no se mencionaba la Declaración.

116. En cuanto a las medidas adoptadas por gobiernos indígenas, aunque en la resolución de la tribu rosebud sioux por la que se creó la Community for the Advancement of Native Studies no se mencionaba específicamente la Declaración, la labor de la organización tenía por objeto ponerla en práctica.

Libre determinación y autonomía

117. La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos observó que las 15 asambleas anuales del Parlamento del pueblo qollana aymara de los Andes se habían celebrado de acuerdo con la forma de autogobierno prevista en el sistema ayllu-marka. La práctica de las formas tradicionales de gobierno ofrecía garantías para su continuidad, incluso donde no habían sido reconocidas por los Estados.

Participación en la toma de decisiones, incluidas las obligaciones referidas a la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas

118. Una organización indicó que el gobierno de su país había demostrado falta de compromiso con el principio del consentimiento libre, previo e informado, y citó como ejemplo un plan que, aunque elaborado en principio como estrategia para alcanzar los objetivos de la Declaración, presentaba deficiencias. En particular, no se solicitaba el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en relación con algunos aspectos de las políticas que les afectarían más directamente.

Cultura y lenguas

119. La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos mencionó sus esfuerzos por promover el uso de la lengua aymara en algunas escuelas municipales de Chile para revitalizar la cultura tradicional.

No discriminación e igualdad

120. El Centro de Promoción y Desarrollo Rural Amazónico observó que estaba trabajando para promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la

contratación de técnicos de salud indígenas por la Dirección Regional de Salud de Ucayali (Perú). Esa labor estaba en consonancia con la Declaración y con las normas técnicas relativas a la aplicación general de enfoques interculturales en el sector de la salud, especialmente con respecto a los profesionales de la salud que trabajaban con comunidades indígenas.

Tierras, territorios y recursos

121. El National Native Title Council mencionó su labor en pro de que el Gobierno de Australia consagrara los principios de la Declaración en el desarrollo del plan de la cuenca de los ríos Murray y Darling, especialmente con respecto al derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su singular relación con sus tierras, territorios, aguas y mares costeros y demás recursos. En relación con el plan para la cuenca, la organización, junto con sus asociados, trabajaba también en el Proyecto Nacional de Investigación de Corrientes Culturales, que incorpora los principios de la Declaración, en particular el artículo 32, párrafo 1.

Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados

122. La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos se refirió a su patrocinio del Tribunal de Justicia Awuayala, órgano cuyas decisiones, aunque no son vinculantes, apelaban a la conciencia y la razón de la humanidad. El Tribunal, creado por la nación kallawayas del Estado Plurinacional de Bolivia, celebró su primera audiencia en junio de 2012 para escuchar la reivindicación por la nación jacha suyu pakajaki de territorios enajenados en aplicación de la doctrina del descubrimiento.

C. Consideración de la Declaración al elaborar nuevas leyes y políticas u otras medidas que afecten a las personas indígenas

123. Varias organizaciones de pueblos indígenas comunicaron que la Declaración no se tenía en cuenta de manera sistemática cuando los Estados elaboraban leyes, políticas u otras medidas que afectaban a los pueblos indígenas. En algunos casos, eso podía atribuirse a la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas en el país o a la opinión de que los pueblos indígenas constituían un obstáculo para el desarrollo. En algunos casos, las organizaciones de pueblos indígenas habían tratado sin éxito de alentar a los Estados a que adoptasen medidas legislativas, políticas y de otro tipo especialmente destinadas a aplicar la Declaración.

124. Varias organizaciones de pueblos indígenas señalaron que ellas mismas utilizaban la Declaración como base para el establecimiento de normas y la labor de promoción. Por ejemplo, el Parlamento Sami de Noruega utilizaba la Declaración y otras normas internacionales en su labor diaria. El National Indian Youth Council incorporaba sistemáticamente la Declaración en su discurso y en sus actividades.

125. La Community for the Advancement of Native Studies señaló que trabajaba con las naciones, comunidades y organizaciones nativas para identificar, priorizar, formular y ejecutar proyectos de acuerdo con su voluntad, sus prioridades y sus preocupaciones. La organización se proponía incorporar la Declaración de manera explícita en su labor cada vez que fuese posible.

126. La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos dirigía procesos encaminados a recuperar formas tradicionales de autogobierno, fomentar el respeto al principio del consentimiento libre, previo e informado, adoptar medidas que tuvieran por objeto fortalecer las culturas andinas y la educación intercultural, proteger las tierras, los territorios y los recursos tradicionales y la propiedad colectiva, y abrir espacios

para la aplicación de la justicia tradicional. En su labor, la Comisión citaba expresamente la Declaración y el Convenio N° 169 de la OIT.

127. Las organizaciones Naga Women's Union y Naga Peoples Movement for Human Rights dijeron que la Declaración era una fuente de fortaleza y energía para reclamar sus derechos como pueblos indígenas. Sin embargo, la Declaración no se mencionaba expresamente en las decisiones colectivas del pueblo naga, ya que los sistemas colectivos de adopción de decisiones reflejaban la práctica tradicional.

128. El Native Indian Youth Council había formulado una política específica para promover la inclusión de los pueblos indígenas de las zonas urbanas en el logro de los objetivos de la Declaración. La organización citaba expresamente la Declaración en su labor de promoción.

129. El National Native Title Council se regía por la Declaración en su labor y sus prácticas propias. Señaló que en sus documentos normativos se hacía referencia a los principios de la Declaración, especialmente los relacionados con el consentimiento libre, previo e informado y la libre determinación.

D. Iniciativas para dar a conocer la Declaración a las comunidades y los gobiernos

130. Las organizaciones de pueblos indígenas describieron varias medidas que se habían adoptado o estaban previstas para dar a conocer mejor la Declaración. Las actividades se centraban especialmente en la traducción y la divulgación de la Declaración y la organización de talleres y otras actividades de formación. Algunas organizaciones hicieron referencia a las dificultades de financiación con que tropezaban para realizar actividades con ese fin.

131. El Aldet Centre había iniciado conversaciones con dirigentes estatales para darles a conocer la Declaración y también había divulgado y publicitado el contenido de la Declaración tanto en inglés como en la lengua kwéyòl.

132. El Botswana Khwedom Council mencionó que utilizaba la Declaración como punto de referencia en los talleres que organizaba y en las conversaciones con el Gobierno nacional.

133. La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos hizo hincapié en la importancia que revestía la divulgación de la Declaración y comunicó que había organizado seminarios y talleres a ese respecto, señalando que había una amplia demanda entre los pueblos indígenas por dichos instrumentos de creación de la capacidad. No obstante, expresó su preocupación por la organización de esos talleres debido a la escasez de recursos financieros. El Centro de Promoción y Desarrollo Rural Amazónico señaló también que no estaba en condiciones de divulgar la Declaración a gran escala por falta de recursos financieros.

134. La Community for the Advancement of Native Studies comenzó recientemente a dar a conocer la Declaración en diversos niveles de la comunidad y de gobierno para mejorar las perspectivas de su aplicación.

135. La Indigenous Bar Association publicó *Understanding and Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: An Introductory Handbook*², manual que explicaba la Declaración por grupos temáticos y terminaba con información sobre la aplicación y otros recursos. El manual había sido proporcionado a las autoridades

² Se puede consultar en www.indigenousbar.ca/pdf/undrip_handbook.pdf.

nacionales y provinciales, comisiones de relaciones en virtud de tratados con pueblos indígenas, comisiones de derechos humanos y algunos tribunales nacionales, y distribuido en una serie de talleres organizados en todo el Canadá para abogados, educadores, dirigentes comunitarios y promotores de los derechos humanos.

136. Entre las iniciativas que la Naga Women's Union y el Naga Peoples Movement for Human Rights pusieron en marcha para dar a conocer mejor la Declaración cabe citar la organización de actividades de capacitación, talleres, seminarios, reuniones y consultas a nivel comunitario sobre la Declaración, los derechos humanos y los mecanismos de las Naciones Unidas. Ese proceso incluyó la traducción y divulgación de la Declaración.

137. El National Khoi-San Council había organizado varios talleres sobre la Declaración con dirigentes indígenas y representantes de las comunidades en diferentes partes de Sudáfrica a través de instituciones como el Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África. Señaló también que la Declaración se había traducido del inglés al afrikaans, idioma muy extendido entre los pueblos khoi y san.

138. El Native Indian Youth Council informó de su labor para integrar la Declaración en sus actividades de promoción, así como su participación en actividades para dar a conocer la Declaración a dirigentes de la nación navajo y otros dirigentes tribales.

139. El National Native Title Council trataba de dar a conocer la Declaración incorporando los objetivos y derechos enunciados en ella en los documentos, intervenciones y recomendaciones que presentaba a distintos niveles de gobierno y partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional. Hizo hincapié en la importancia de dar a conocer mejor la Declaración a los pueblos indígenas. Esa organización también trataba de que el Gobierno, la industria y los pueblos indígenas tomaran conciencia de la necesidad de que las industrias extractivas mantuvieran una relación más eficiente y eficaz con los pueblos indígenas para hacer efectivo su derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado.

140. El Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu informó sobre la forma en que aprovechaba las posibilidades que ofrecían la prensa y otros medios de comunicación, así como los talleres y las reuniones, para divulgar información sobre la Declaración. En particular, esos esfuerzos iban dirigidos a los pueblos indígenas, las autoridades nacionales y locales, los dirigentes comunitarios, el ejército, la policía y las organizaciones de la sociedad civil. Observó también que la Declaración no se había traducido a algunos idiomas indígenas, cuestión fundamental que debía resolverse a corto plazo.

141. La Khmers Kampuchea-Krom Federation señaló que utilizaba sitios web, emisoras de radio en línea y medios sociales para dar a conocer mejor la Declaración.

142. El Parlamento Sami de Noruega tuvo a su cargo la organización técnica de la Conferencia Preparatoria Global Indígena para la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General, denominada la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, celebrada en Alta (Noruega) del 10 al 12 de junio de 2013, que permitió crear conciencia sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración a nivel local y regional.

E. Dificultades en la adopción de medidas y la aplicación de estrategias para alcanzar los objetivos de la Declaración

143. Varias organizaciones de pueblos indígenas observaron que había desconocimiento de la Declaración, incluso entre las propias organizaciones indígenas. En algunos casos, eso se debía a que no se disponía del texto de la Declaración ni de información sobre ella en los idiomas correspondientes.

144. Una organización señaló que el desconocimiento de la Declaración en su país guardaba relación también con la importancia que se concedía al derecho internacional a nivel nacional. A la falta de claridad a ese respecto contribuía la opinión del gobierno de que la Declaración era un documento en que tan solo se consignaban aspiraciones. Esa postura había influido en las opiniones de algunos pueblos indígenas, así como de abogados y miembros de la judicatura.

145. Otro problema con que se tropezaba era la dificultad percibida de la propia Declaración al abordar la tradicional dicotomía entre los derechos individuales y colectivos en las sociedades. Ello se consideraba un obstáculo para hacer más efectiva la Declaración y facilitar su comprensión.

146. Una organización observó que el costo de la labor de dar a conocer la Declaración, que incluía desplazamientos onerosos a zonas remotas con poblaciones dispersas, a menudo recaía sobre los pueblos indígenas y sus aliados.

147. Uno de los mayores problemas era la falta de voluntad política de los Estados para aplicar la Declaración y considerar los derechos de los pueblos indígenas de una manera más amplia. Una organización se refirió a la lentitud con que el gobierno de su país iba captando la esencia de los principios y objetivos de la Declaración. En algunos casos, también era insuficiente la atención prestada por las autoridades a las cuestiones indígenas o el apoyo público a los derechos de los pueblos indígenas. Varias organizaciones de pueblos indígenas señalaron en particular los problemas de aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado. En algunos casos, la falta de voluntad política se manifestaba también en falta de legislación o de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también expresaron preocupación por la inobservancia de los derechos de los indígenas sobre los recursos terrestres y marinos. Una organización señaló que no podían practicar plenamente sus usos y costumbres y tradiciones porque sus tierras se encontraban dentro de un parque nacional.

148. Se señaló que la problemática interpretación del principio de igualdad era otro obstáculo para lograr la aplicación de la Declaración. Se utilizaban interpretaciones de igualdad que no tenían en cuenta que las normas de derechos humanos incluían, y en ocasiones requerían, medidas especiales, y se aducía la preocupación por un trato diferencial o especial a los pueblos indígenas como excusa para no hacer efectivos sus derechos.

149. Tres organizaciones de pueblos indígenas señalaron problemas relacionados con la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas en sus propios países. Otra señaló que, aunque en su país sí gozaban de reconocimiento, los pueblos indígenas se enfrentaban al problema de la discriminación racial.

150. Varias organizaciones expresaron preocupación por la escasa integración y participación de los pueblos indígenas en los debates, asuntos públicos y procesos políticos pertinentes del Estado, comprendidos los procesos relacionados con los programas, leyes y políticas. Una organización señaló que el Gobierno daba la impresión de ser inaccesible. Se dijo también que la falta de integración de los pueblos indígenas en los debates pertinentes tenía como consecuencia la ausencia de un diálogo constructivo entre los pueblos indígenas y las autoridades públicas. Además, en algunos casos no había diálogo con los pueblos indígenas ni siquiera cuando las industrias extractivas realizaban actividades en sus tierras.

151. Una organización también señaló la ausencia de mecanismos de vigilancia del cumplimiento que pudieran alentar a los Estados a respetar la Declaración.

152. Otro obstáculo importante era la falta de recursos y financiación suficientes para que las organizaciones representativas de los indígenas pudieran funcionar eficazmente y promover la Declaración. También se mencionaron problemas relacionados con deficiencias de la infraestructura y las comunicaciones.

153. En cuanto a las dificultades internas de las instituciones u organizaciones de pueblos indígenas, una organización mencionó que las numerosas presiones a que se enfrentaban los pueblos indígenas y el escepticismo acerca del potencial de la Declaración para impulsar el cambio podían constituir un obstáculo a su aplicación. Algunos pueblos indígenas manifestaron su escepticismo respecto del modo en que la Declaración podía resolver los acuciantes problemas cotidianos que eran habituales en las comunidades indígenas.

F. Prácticas óptimas

154. Muchas organizaciones de pueblos indígenas describieron medidas que podrían constituir prácticas óptimas para la aplicación de la Declaración.

155. En cuanto al papel de esas organizaciones, las prácticas óptimas podían incluir la adopción de iniciativas para aplicar la Declaración velando por que sus políticas, leyes y reglamentos estuvieran en consonancia con sus disposiciones, educar mejor a todas las partes interesadas en la Declaración y alentar a jueces y abogados a invocarla en sus alegatos y en los tribunales. Se señaló también que, en los casos en que los Estados no mostrasen voluntad de aplicar la Declaración, los pueblos indígenas deberían propugnar su aplicación ante los mecanismos pertinentes en los planos nacional, regional e internacional.

156. Se sugirió también que entre las prácticas óptimas relativas a las medidas y estrategias de aplicación apropiadas se incluyeran iniciativas de educación destinadas a dar a conocer la Declaración. Entre las prácticas óptimas se contaba también el fomento de la capacidad de los pueblos indígenas.

157. El sistema de las Naciones Unidas podría trabajar con las organizaciones de pueblos indígenas para fomentar su capacidad en relación con la Declaración y apoyar su labor y su participación. A ese respecto, se alentó a las Naciones Unidas a que siguieran apoyando su participación, entre otras cosas mediante la prestación de asistencia financiera. Varias organizaciones observaron que las Naciones Unidas podían desempeñar un papel positivo de apoyo y aliento a los Estados para que reconociesen a los pueblos indígenas y aplicasen la Declaración.

158. Otras prácticas óptimas podían ser el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones de las Naciones Unidas y las comunidades de base y el fortalecimiento del apoyo prestado por las instituciones de las Naciones Unidas a esas comunidades. Se propuso también que el Mecanismo de Expertos y otros mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas colaborasen con las ONG para mejorar la asistencia a los pueblos indígenas proponiendo medidas y estrategias de aplicación para alcanzar los objetivos de la Declaración.

159. También se hicieron recomendaciones al sistema de las Naciones Unidas, como la de evaluar en particular las cuestiones relativas a los pueblos indígenas durante el examen periódico universal. Una organización pidió a los mecanismos de las Naciones Unidas que enunciaran en más detalle los principios jurídicos de la Declaración.

160. El National Native Title Council observó que era necesario redoblar los esfuerzos por dar a conocer la Declaración a funcionarios y departamentos gubernamentales, lo que podía contribuir al logro de los objetivos de la Declaración. La organización señaló, a modo de ejemplo, que se había dado a conocer mejor la Declaración al Comisionado para la Justicia Social de Australia e hizo hincapié en la importancia de establecer una relación de colaboración entre el Gobierno de Australia y los pueblos indígenas para desarrollar una estrategia sostenible que diera poder a estos pueblos y permitiese dar plena efectividad a la Declaración.

161. Las organizaciones de pueblos indígenas destacaron entre las mejores prácticas el reconocimiento de los pueblos indígenas en los países en que este aún no existía; la observancia de la Declaración y su incorporación en las políticas públicas; la apertura de procesos de consulta con los pueblos indígenas en los asuntos que afectaban a sus vidas y actividades; la prestación de apoyo a la labor de las organizaciones de pueblos indígenas en pro de la Declaración; la desmilitarización; y el acceso a la justicia. El Centro de Promoción y Desarrollo Rural Amazónico propuso la creación en el Perú de un comité intercultural encargado de los intereses indígenas.

IV. Observaciones finales

162. El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas valora en alto grado las respuestas a su cuestionario enviadas por Estados y pueblos indígenas, organizaciones de pueblos indígenas y ONG, especialmente porque pueden inspirar la concepción de estrategias creativas para la aplicación de la Declaración.

A. Los Estados

163. En la mayoría de las respuestas de los Estados se facilitaba información de carácter muy general. En particular, apenas se proporcionó información sobre la eficacia de las medidas adoptadas. La mayoría de los Estados solo facilitaron respuestas positivas a las preguntas. Las respuestas negativas habrían contribuido también a facilitar la comprensión de los problemas con que tropiezan los Estados para aplicar la Declaración.

164. Muchos Estados señalaron las leyes nacionales que reconocían y protegían los derechos de los pueblos indígenas, lo que el Mecanismo de Expertos considera un logro importante. No obstante, los Estados no indicaron si habían adoptado suficientes medidas administrativas para velar por que las medidas legislativas se tradujeran en la protección efectiva de esos derechos.

165. Aunque algunos Estados señalaron las iniciativas sectoriales que habían emprendido para aplicar las disposiciones de la Declaración, eran pocos los que habían adoptado estrategias o planes de acción globales para aplicar cabalmente la Declaración. Los derechos que enuncia la Declaración son interdependientes y se interrelacionan, por lo que su efectividad requiere enfoques y medidas globales.

166. Aunque no lo señalaban expresamente en sus respuestas al cuestionario, algunos Estados parecían considerar que era difícil conciliar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas que se enuncian en la Declaración con el principio de igualdad. La igualdad sigue siendo interpretada por algunos Estados como un factor que prohíbe la adopción de programas especializados para alcanzar los objetivos de la Declaración. El Mecanismo de Expertos subraya que la igualdad sustantiva puede requerir que se trate a los pueblos indígenas como grupos separados con circunstancias especiales.

167. Las respuestas de algunos Estados parecían indicar una falta de precisión en la definición de pueblos indígenas, por ejemplo, en cuanto a las distinciones entre minorías y pueblos indígenas. Algunos Estados también indicaron que los pueblos indígenas constituían la mayoría numérica dentro del país y, por tanto, no se temía por el reconocimiento de sus derechos, cosa que, en opinión del Mecanismo de Expertos, no siempre es así. A la inversa, otros Estados indicaron que ninguno de los grupos de su población se ajustaba a la definición de pueblo indígena.

168. Un problema planteado fue la tentativa de algunas personas y ONG de socavar el proceso de titularización y demarcación de las tierras aconsejando a los pueblos indígenas que reclamen más tierras que las que tradicionalmente ocupaban, rechacen el proceso de titularización y demarcación o no pidan esa demarcación. Ello es señal de posibles tensiones entre los Estados, los pueblos indígenas y las ONG en cuanto al mejor criterio para alcanzar los objetivos de la Declaración. También en este caso, una mayor información por parte de los Estados sobre la forma de ir limando esas diferencias para promover relaciones armoniosas ayudaría enormemente a otros Estados en su labor ulterior destinada a la aplicación de la Declaración.

B. Los pueblos indígenas, las organizaciones de pueblos indígenas y las organizaciones no gubernamentales

169. Muchas organizaciones de pueblos indígenas detallaron sus estrategias, que incluían actividades a todos los niveles, para alcanzar los objetivos de la Declaración. La mayoría de las organizaciones de pueblos indígenas que respondieron al cuestionario realizaban al menos una de las siguientes actividades: promoción; fomento de la capacidad, entre otras cosas elaborando y divulgando recursos e impartiendo formación sobre la Declaración a comunidades, pueblos indígenas y autoridades públicas; estudios sobre los problemas de los indígenas y traducción de la Declaración a lenguas indígenas.

170. Fueron muy pocas las organizaciones que propusieron estrategias globales de ámbito nacional. No obstante, algunas organizaciones de pueblos indígenas se concentraban principalmente en cuestiones temáticas y, como mencionaron muchas de ellas, sus actividades institucionales se veían generalmente limitadas por la falta de recursos financieros y la falta de voluntad de los Estados de cooperar con los pueblos indígenas. Sin embargo, algunas organizaciones habían realizado actividades en los planos nacional e internacional estructuradas de manera que sus estrategias surtieran el mayor efecto posible respecto de la aplicación de la Declaración por el Estado.

171. La mayoría de las organizaciones de pueblos indígenas que respondieron al cuestionario señalaron haber integrado el espíritu y las normas de la Declaración en sus directrices, prácticas y actividades internas. Varias de ellas afirmaron también que estaban dispuestas a participar en los procesos públicos de ámbito nacional o local que se establecieran de buena fe y en colaboración con los pueblos indígenas y sus organizaciones. No obstante, varias organizaciones hicieron referencia a la renuencia de los Estados a colaborar de forma apropiada, o siquiera en medida alguna, con los pueblos indígenas en los asuntos que les afectaban.

172. La mayoría de las organizaciones mencionaron la falta de atención de los Estados a la Declaración y los derechos de los pueblos indígenas, la falta de comprensión del valor jurídico de la Declaración y el lugar que debe ocupar en el ordenamiento jurídico nacional, y la falta de apoyo público a los pueblos indígenas. Todas esas cuestiones impedían la plena aplicación de la Declaración.

173. Una de las prácticas óptimas señaladas consistía en pedir a los mecanismos de las Naciones Unidas que prestaran más ayuda a los pueblos indígenas para impulsar las estrategias de aplicación. A fin de dar a conocer la Declaración, era necesario que tanto los Estados como los pueblos indígenas desplegaran esfuerzos en el ámbito nacional y local.